

PRÓLOGO

“Un segundo significado de Justicia, el más común yo diría, es simplemente eficiencia”.

RICHARD POSNER.

El CONSEJO EMPRESARIO ARGENTINO encargó este trabajo al **fores** y al COLEGIO DE ABOGADOS DE BUENOS AIRES, en el convencimiento de la significativa influencia que la organización y desenvolvimiento del Sistema Judicial tiene respecto del crecimiento económico, al dar certeza y protección a los habitantes. Diversos estudios demuestran que las decisiones de inversión se adoptan luego de analizados diversos factores de riesgo, entre ellos, uno de los de mayor significación es el funcionamiento del Sistema Judicial como parte esencial de la seguridad jurídica.

El tema de la Justicia está entre las prioridades más altas de la opinión pública, pues transitamos una grave crisis de confianza. Parece que hoy el sistema de administración de justicia tiene serias dificultades para satisfacer las necesidades de la sociedad. Más aún, resulta del trabajo que una de las causas más graves de la inseguridad reside en la presunta impunidad, y la sociedad considera que esto es consecuencia de que la Justicia: no investiga; no penaliza, y que cuando lo hace, es tarde. Esta sensación se intensifica tratándose de casos con connotaciones públicas, pues se percibe la falta de independencia del Poder judicial respecto del Poder Político.

Hemos aprendido durante el curso de este trabajo que los países más avanzados del mundo han encarado y transitado por una reforma de su Sistema Judicial buscando mayor eficiencia. Si bien pueden existir distintas definiciones de lo que se entiende por eficiencia, todos coinciden en las siguientes notas: acceso simple, a costos razonables, para todos y, finalmente, que las decisiones de la Justicia resulten aceptables en tiempo y calidad.

También hemos comprobado que, en el caso argentino, el conjunto de la sociedad descuidó por años la administración de justicia, sin advertir la importancia de su correcto funcionamiento.

El estudio muestra cómo el gasto público en Justicia Federal, entre 1941 y 1997, se triplicó como porcentual del Producto Interno Bruto. A partir de 1990, se aumentaron los recursos de manera considerable y ese aumento presupuestario fue canalizado mayoritariamente a recomponer la situación salarial. En tanto que ha sido mínimo el aumento de recursos a la incorporación de tecnología, mejoramiento de infraestructura y capacitación de personal.

Parecería, entonces, que la crisis no reconoce por causa una restricción presupuestaria, sino más bien carencias en la planificación; organización y gerenciamiento del sistema de administración de justicia. Es decir, las ineficiencias no se han reducido, aumentando la escala del gasto.

Uno de los elementos que resulta del diagnóstico contenido en el trabajo es la congestión del Sistema Judicial. Esto es producto de la baja tasa de resolución de causas y, en alguna medida, del aumento de la litigiosidad. Esto, como es obvio, trae aparejadas demoras significativas en las decisiones judiciales.

La congestión del sistema, las dificultades de acceso (incluyendo los elevados costos) y la falta de investigación de denuncias, han sido causas de sustitutos imperfectos, sistemas “paralelos”, y hasta de justicia “por mano propia”, o justicia de “opinión” o “mediática” que se arrogan los medios de comunicación, con simultáneo desprestigio de la investidura judicial.

Por otra parte, hoy nadie duda que los medios alternativos de solución de conflictos, como por ejemplo la mediación y el arbitraje, descongestionan el sistema a medida que se generaliza su utilización.

De cualquier manera, el trabajo demuestra que una de las principales causas de la congestión está producida por defectos en la distribución del trabajo. Es decir, hoy existen Tribunales con una fuerte sobrecarga de tareas y otros que tienen recursos ociosos. Así, por ejemplo, hay Juzgados Penales superados por la demanda (tal es el caso de los Correccionales y los de Menores).

Siguiendo esta idea, una de las propuestas del trabajo es la creación de la denominada “Justicia Inmediata” o para pequeños conflictos que responde al principio de dar una respuesta jurisdiccional, acorde con la mayor o menor sencillez del asunto. Es decir, una distribución del trabajo que, en una primera instancia, distinga los asuntos sencillos de aquellos otros que, por su complejidad, requieren una dedicación de recursos de magnitud. Corresponde aclarar que no ha sido este el criterio de división de tareas que ha prevalecido en la administración de justicia.

Esta Justicia de los temas sencillos debe privilegiar la celeridad y los costos reducidos, para lo cual la informalidad y la oralidad serán ineludibles. La Justicia Inmediata acercará el Juez a los hechos y, por ende, a la gente. De esta manera, la sociedad tendrá mejores respuestas en los temas sencillos, al tiempo que se descongestionarán los Juzgados en los que se tramiten los temas más complejos.

En su momento, y según las circunstancias de lugar, el Juez de Paz de la campaña argentina acercó la administración de justicia a la población, de manera rápida y a bajo costo. No se trata de volver atrás, sólo de emular aquellos casos – incluyendo muy valiosas experiencias extranjeras – en los que la Justicia ha podido dar respuesta a las necesidades de la gente, de manera eficiente.

Otro de los aspectos destacados en el trabajo es la ausencia de investigación de ilícitos por parte de la Justicia Penal que ha llevado a una tasa de subdenuncia que presenta indicios alarmantes. En efecto, algunas estimaciones indican que aproximadamente el 50% de los hechos ilícitos y aquellos otros que ameritan intervención judicial, no son puestos en conocimiento de las autoridades. El diagnóstico que resulta del trabajo indica que la

ausencia de investigación o de esclarecimiento de los hechos denunciados tiene por efecto que, no más del tres por ciento de los mismos, termine en una sentencia (el resto termina en: “archivo”, desestimado, prescripto o sobreseído).

La no investigación de los hechos denunciados puede tener distintas causas, entre ellas, la ausencia de una Policía Judicial que investigue los ilícitos a requerimiento del Juez o el Fiscal y que cuente con recursos adecuados para su tarea. La puesta en funcionamiento de una Policía Judicial dependiente del Poder Judicial, con recursos adecuados, ayudaría enormemente a la investigación de los hechos denunciados y, seguramente, a la dilucidación de casos que hoy se archivan.

Creemos oportuno y necesario repensar el Sistema Judicial (Nacional y Provincial), partiendo de la premisa que toda reforma debería asegurar y garantizar el acceso de la población al sistema de administración de justicia. De otra forma, la lejanía respecto de la sociedad (y en algunos casos su exclusión), generan desconfianza y descrédito en la Justicia. En definitiva, como quedó dicho, ante la existencia de dificultades de acceso, las personas recurrirán a otros medios para solucionar sus conflictos.

Hoy, resulta necesario definir un plan general para la administración de justicia con el objeto de no repetir lo hecho en diversas oportunidades, como ser: las reformas por “parches”; las reformas de los Códigos de Procedimientos pensando que esta es la solución del problema; las reformas de imposible aplicación por falta de recursos técnicos o de infraestructura.

Estas, y otras muchas propuestas que se podrán leer en este trabajo, pretenden ser una contribución para concluir el análisis del Sistema Judicial que la Argentina necesita para ingresar al 2000. El CONSEJO EMPRESARIO ARGENTINO considera importante recordar que el desarrollo económico sostenible en el tiempo requiere, ineludiblemente, de seguridad jurídica y, por ende, de un Sistema Judicial eficiente.

Buenos Aires, octubre de 1998.